Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a veintidós de enero de dos mil veinticinco.

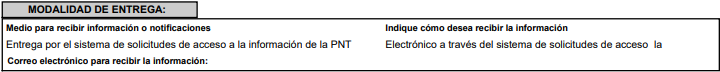
**VISTO** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **07494/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por **XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX,** en lo sucesivola parte **Recurrente,** en contra de la respuesta a la solicitud de información con número de folio **01368/ECATEPEC/IP/2024,** por parte del **Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** presentó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vinculada al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, mediante la cual requirió la información siguiente:

*“Se solicita información sobre todas las adscripciones, adscripción actual, todos los cargos anteriores, cargo actual, denuncias administrativas y/o penales y sanciones disciplinarias o administrativas de las siguientes personas servidoras públicas: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx****”*** *(sic)*

**Modalidad de Entrega:** Electrónico, a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT, que, para efectos del presente asunto, se entenderá a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, SAIMEX; asimismo, señaló el referido sistema como medio para recibir información o notificaciones, como se advierte a continuación:



**2. Respuesta.** El **trece de noviembre de dos mil veinticuatro,** el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“…Por medio del presente, el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos hace de su conocimiento que su solicitud ha sido debidamente atendida y se han emitido las respuestas oficiales...” (sic)*

El **Sujeto Obligado** adjuntó lo siguiente:

- Oficio número DA/ECA/SRH/DRLyDP/3477/2024, del once de noviembre de dos mil veinticuatro, mediante el cual la Subdirectora de Recursos Humanos manifestó que no le era posible proporcionar información de la primera persona referida en la solicitud, en atención a que la misma es un elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ya que las funciones de seguridad pública deben ser clasificadas como reservadas, en virtud de que revelar dicha información podría comprometer la seguridad pública del municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y el criterio número 00/2009 con el Rubro “Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad por, por excepción pueden considerarse información reservada”. Por otro lado, respecto de las demás personas mencionadas en la solicitud, informó que después de hacer una búsqueda exhaustiva, minuciosa y razonada en el Sistema de Nómina del Ayuntamiento, no se encontró dentro del personal activo los nombres de dichas personas, asimismo, refirió que la base de datos con la que cuenta la Dependencia, contiene solo la información a partir del año dos mil a la fecha, sin que la misma tenga datos de los servidores públicos que presten o prestaron sus servicios en los Órganos Descentralizados DIF, SAPASE e IMCUFIDEEM, ya que estos cuentan con sus propias bases de datos.

- Oficio número CIM/ECA/SA/DCE/0833/2024, del trece de noviembre de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Contralor Interno Municipal, manifestó que no se contaba con el RFC de las personas mencionadas, por lo cual no le era posible atender la solicitud en los términos planteados, con la finalidad de evitar la posibilidad de confusión por homónimos.

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**Acto impugnado:**

*“La respuesta emitida por el Contralor Interno Municipal de Ecatepec en el oficio CIM/ECA/SA/DCE/0833/2024 y la respuesta emitida por la Subdirectora de Recursos Humanos miante el oficio DA/ECA/SRH/DRLyDP/3477/2024.” (sic)*

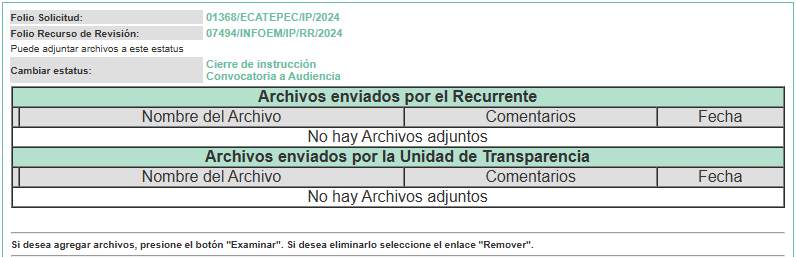
**Y, Razones o motivos de inconformidad**:

*“IMPUGNACIÓN RELACIONADA CON LA RESPUESTA DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC Por este medio, impugno la respuesta del Contralor Interno Municipal de Ecatepec, mediante el oficio CIM/ECA/SA/DCE/0833/2024, de fecha 13 de noviembre de este año, que recayó a la solicitud de información sobre las adscripciones, adscripción actual, todos los cargos anteriores, cargo actual, denuncias administrativas y/o penales y sanciones disciplinarias o administrativas de las siguientes personas servidoras públicas: 1) Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx. 2) Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx. 3) Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. 4) Xxxxxx Xxxxxx. 5) Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 6) Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. 7) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx. 8) Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx. 9) Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (personal involucrado en la solicitud) (en adelante “las 9 personas cuya información pública se requiere”). En dicho oficio, la autoridad menciona que no se cuenta con el RFC de las personas mencionadas y que, con el fin de evitar la posibilidad de confusión por homónimos, no es posible atender la solicitud. Previamente a desarrollar el motivo de impugnación, cabe mencionar que la parte solicitante carece de la clave fiscal de las 9 personas cuya información pública se requiere, pues sería imprescindible conocer sus fechas de nacimiento, datos a los que es imposible acceder. Ahora bien, como principal motivo de impugnación, está la violación a los principios de legalidad y máxima publicidad protegidos por el artículo 9, fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (en adelante LTAIPEM o Ley de Transparencia estatal). Esto es así porque el sujeto obligado no fundó ni motivó la restricción que impuso para brindar la información: proporcionar el RFC de cada persona, contraponiéndose a sus obligaciones constitucionales (artículos 14 y 16) y legales (causa de impugnación conforme al artículo 179, fracción XIII de la Ley de Transparencia estatal). Por otra parte, estableció una restricción ilegal que limita el propio contenido del derecho de acceso a la información, según los artículos 4, segundo párrafo (principio de máxima publicidad) y 7 (garantizar el efectivo acceso a la información de cualquier persona física reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad) de la Ley de Transparencia estatal. Finalmente, es importante resaltar que a esa restricción se suma el hecho de que el sujeto obligado no justifica haber realizado la búsqueda exhaustiva y congruente con lo solicitado, ni haber encontrado homónimos, especificando en qué casos, que le impidieran saber con precisión de qué persona servidora pública se pide la información. IMPUGNACIÓN RELACIONADA CON LA RESPUESTA DE LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Por este medio impugno la respuesta de la Subdirectora de Recursos Humanos, mediante el oficio DA/ECA/SRH/DRLyDP/3477/2024 del 11 de noviembre de este año, que recayó a la solicitud de información 1368/ECATEPEC/IP/2024, en la que se solicita información sobre todas las adscripciones, adscripción actual, todos los cargos anteriores, cargo actual, denuncias administrativas y/o penales y sanciones disciplinarias o administrativas de las 9 personas cuya información pública se requiere. RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE UN ELEMENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Respecto de la primera de ellas, Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, menciona el sujeto obligado que no puede proporcionar información por tratarse de un elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, y las funciones de seguridad pública deben ser clasificadas como reservadas, en virtud de que revelar dicha información podría comprometer la seguridad pública de este Municipio. Al respecto, conviene precisar que las adscripciones de las personas servidoras públicas sólo pueden clasificarse como reservadas de manera excepcional. Lo que se advierte de la misma lectura el criterio número 06/2009, citado por la autoridad, con el rubro "Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción pueden considerarse información reservada". En efecto, se solicitó información relacionada con el cargo, la trayectoria institucional y el desempeño de las 9 personas. No se solicitó acceso a sus datos personales (como domicilio, familia, datos de contacto) y tampoco se pidió información relacionada con su función: modus operandi, su itinerario de actividades o sus hábitos para cumplir con el desempeño de su labor, ni información relativa a las medidas adoptadas por el sujeto obligado para velar por su seguridad como, por ejemplo, la manera en que la protege, si cuenta o no con cuerpos policiales a su disposición para el cuidado de las personas y/o sus familias, ni con cuántos cuenta. Partiendo del principio de deber de identificación de toda persona servidora pública, se debe considerar que la información solicitada es de interés general porque es de relevancia conocer quiénes son los servidores públicos que desempeñan un cargo en las instituciones y cómo lo desempeñan. Considerar que todas las autoridades encargadas de la seguridad pública están excluidas de dicho deber, es arbitrario. Debe prevalecer el interés público que reviste la rendición de cuentas a la ciudadanía con respecto a conocer el desempeño de las personas servidoras públicas debido a las funciones que operativamente podrían ejercer. Es decir, si han infringido o no normas administrativas o penales o actuado irregularmente. De ser así, también importa saber si el órgano estatal al que pertenecen o pertenecían tomó las medidas pertinentes para investigarlas y sancionarlas y, de ser el caso, si se llevaron a cabo las acciones necesarias para reparar los daños que dichas irregularidades pudieren haber causado. Reservar la información impide que la ciudadanía mantenga un escrutinio sobre las personas servidoras públicas que, presuntamente, laboran en el municipio; lo que resulta contrario a los principios democráticos de rendición de cuentas, transparencia y máxima publicidad. Proporcionar la información no pone en riesgo la seguridad de las personas ni del Estado, ya que no se pretende utilizar para fortalecer grupos criminales o impedir las acciones de procuración de justicia. Inclusive, es evidente que la solicitante de información cuenta con el nombre de la persona, si tuviera como propósito infringir su seguridad y tuviera los medios para hacerlo, lo habría hecho a partir de medios ilegales; no obstante, el objetivo es conocer la trayectoria institucional a partir de los medios legalmente establecidos. El ayuntamiento es quien debe emplear estrategias para garantizar la seguridad de su personal, máxime si lo considera como servidor público operativo, sin que sea factible que la estrategia se centre en reservar la información sobre el cargo o cargos desempeñados, así como su trayectoria institucional. Se insiste, la información pública solicitada nada tiene que ver con las medidas que se toman o han tomado para el resguardo de la seguridad de la persona servidora pública. Por último, debe existir un equilibrio entre el derecho de acceder a la información sobre la trayectoria institucional del personal de seguridad y el deber de garantizar su seguridad y la del Estado, de lo contrario no estaríamos ante una excepción sino ante una regla no escrita en la Ley de Transparencia estatal. Por ello, hay que distinguir entre los datos que son necesarios para conocer la trayectoria y el desempeño profesional de las personas y aquellos que no cumplen este objetivo (como el acceso a datos personales, su vida privada o las medidas que la institución desempeña para resguardar concretamente su seguridad). Los primeros, necesariemente deben ser divulgados (al ser indispensables para evaluar las capacidades para el desempeño de las labores encomendadas), mientras que los segundos pueden quedar sometidos a la reserva legal. RESPECTO A LA FALTA DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LA RESPUESTA En cuanto al resto de personas, señala el sujeto obligado, no se encuentran en activo. Adicionalmente, de ninguna de las personas hace referencia a la totalidad de la información que se pidió. Al respecto, el motivo de inconformidad consiste en la vulneración de los principios de congruencia (concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado) y exhaustividad (que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados), como se desprende del Criterio de interpretación SO/002/2017 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de rubro: “Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.” Es decir, no hizo pronunciamiento alguno respecto de las - adscripciones, - adscripción actual, - todos los cargos anteriores, - cargo actual, - denuncias administrativas y/o - denuncias penales y - sanciones disciplinarias o - sanciones administrativas - de las personas servidoras públicas cuya información se solicitó.” (sic)*

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de revisión.** El **nueve de diciembre de dos mil veinticuatro,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones**. De las constancias que obran en el expediente electrónico del SAIMEX se desprende que el **Sujeto Obligado** no rindió su Informe Justificado, del mismo modo la parte **Recurrente** omitió realizar manifestaciones, como se observa a continuación:



**7. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, el **veinte de diciembre de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el día **trece de noviembre de dos mil veinticuatro,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente,** se tuvo por presentado el día **cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro,** esto es al décimo cuarto día hábil posterior a aquel en el que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada. En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Al mismo tiempo, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis del formato de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el SAIMEX.

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracciones I, II, y XIII del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***I****. La negativa a la información solicitada;*

***II****. La clasificación de la información;*

***…***

***XIII.*** *La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; y;*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la información proporcionada por el Sujeto Obligado es adecuada y suficiente para satisfacer el derecho de acceso a la información pública** de la parte **Recurrente**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**Cuarto. Estudio del asunto.** En primer lugar, es conveniente mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se transcribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados sólo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que por rubro y texto, dispone lo siguiente:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” (Sic)*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Es aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información clasificada como reservada o confidencial, cuya difusión pueda lesionar el interés jurídicamente protegido por la Ley, producir un daño mayor que el interés de conocerse, o bien, generar un daño en los derechos de las personas, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En el mismo tenor, los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones previstas en la Constitución Federal por interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes de la materia.

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, motivo del recurso de revisión que ahora se resuelve, se advierte que la parte **Recurrente** requirió al **Sujeto Obligado** le proporcione, información consistente en lo siguiente:

De las nueve personas referidas en la solicitud:

1. Todas sus adscripciones y cargos que han ostentado al cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

2. Denuncias administrativas y/o penales, y sanciones disciplinarias o administrativas.

El **Sujeto Obligado,** por conducto de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento de la persona solicitante la respuesta emitida por los servidores públicos habilitados de la Subdirección de Recursos Humanos y la Contraloría Interna Municipal en los siguientes términos:

La **Subdirectora de Recursos Humanos**: manifestó que no le era posible proporcionar información de la primera persona referida en la solicitud, en atención a que la misma es un elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ya que las funciones de seguridad pública deben ser clasificadas como reservadas, en virtud de que revelar dicha información podría comprometer la seguridad pública del municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y el criterio número 00/2009 con el Rubro “Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad por, por excepción pueden considerarse información reservada”. Por otro lado, respecto de las demás personas mencionadas en la solicitud, informó que después de hacer una búsqueda exhaustiva, minuciosa y razonada en el Sistema de Nómina del Ayuntamiento, no se encontró dentro del personal activo los nombres de dichas personas, asimismo, refirió que la base de datos con la que cuenta la Dependencia, contiene solo la información a partir del año dos mil a la fecha de contestación, sin que la misma tenga datos de los servidores públicos que presten o prestaron sus servicios en los Órganos Descentralizados DIF, SAPASE e IMCUFIDEEM, ya que estos cuentan con sus propias bases de datos.

- El **Contralor Interno Municipal**, manifestó que no se contaba con el RFC de las personas mencionadas, por lo cual no le era posible atender la solicitud en los términos planteados, con la finalidad de evitar la posibilidad de confusión por homónimos.

Al no estar conforme con los términos de la respuesta emitida, la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, donde señaló como motivo de inconformidad, en lo medular, la negativa a entregar la información que es de su interés, ante la falta de fundamentación y motivación para restringir el Derecho de acceso por parte de la Contraloría Interna Municipal, sin acreditar la necesidad del RFC de las personas referidas para evitar entregar información de homónimos, en especial, dado que dicha clave contiene datos personales que no son de acceso público, como la fecha de nacimiento; asimismo, respecto del servidor público adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, reiteró que se solicitó información del cargo, la trayectoria institucional y el desempeño, información que a su parecer es de carácter público, no así el acceso a sus datos personales o información relacionada con el ejercicio de sus funciones, razón por la cual considera que no se pone en riesgo la seguridad de personas ni del Estado, y finalmente, del resto de los servidores públicos alegó que no se cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, ya que no se hizo pronunciamiento alguno respecto de los temas solicitados de las personas referidas

Durante el periodo de manifestaciones el **Sujeto Obligado** fue omiso en rendir su informe justificado, y la parte **Recurrente** fue omisa en hacer valer manifestaciones o rendir alegatos que conforme a derecho resultaran procedentes, por lo tanto se tiene por precluido su derecho.

Una vez establecidas las posturas de las partes, se procede al análisis de los requerimientos de información, así como la información proporcionada por el **Sujeto Obligado,** en contraposición con el motivo de inconformidad alegado por la parte **Recurrente,** con la finalidad de determinar si el Derecho de acceso de esta se satisfizo, o en su defecto, señalar los documentos que en el ejercicio de sus atribuciones pudo haber generado, y que, de manera enunciativa más no limitativa, pudieran colmar dicho derecho, en caso de ser procedente.

En este tenor, en principio es imprescindible mencionar que las Unidades de Transparencia, son el área responsable en cada Sujeto Obligado para dar atención a las solicitudes de información que se realicen al amparo de la Ley, el responsable de dicha área funge como enlace entre el Sujeto Obligado y los solicitantes, y tiene bajo su responsabilidad el tramitar internamente la solicitud de información.

De tal manera que, si bien el Titular de la Unidad de Transparencia no tiene bajo su resguardo el archivo que contiene la documentación en donde consta la información solicitada, esta puede obrar en las distintas áreas que conforman la estructura orgánica del Sujeto Obligado, es por ello que debe turnar la solicitud al servidor público habilitado que tiene bajo su resguardo la misma, de conformidad con los artículos 53, fracciones II y IV y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Por su parte, los servidores públicos habilitados, quienes son designados por el titular de cada Sujeto Obligado derivado de la propuesta del responsable de la Unidad de Transparencia, son las personas encargadas dentro de las diversas unidades administrativas o áreas de los Sujeto Obligado, de apoyar, gestionar y entregar la información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de transparencia; respecto de las solicitudes presentadas, y aportar en primera instancia el fundamento y motivación de la clasificación de la información, teniendo como función buscar, localizar y en su caso entregar la información solicitada, así como integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta y verificar, una vez analizado el contenido de la información, que no se encuentre en los supuestos de información clasificada, de conformidad con los artículos 3, fracción XXXIX, 58 y 59, de la Ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De lo manifestado con antelación se advierte que la persona Titular de la Unidad de Transparencia debe garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que puedan contar con la información, con el objeto de que los servidores públicos habilitados realicen la búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, y que una vez localizada, la misma sea proporcionada a las personas solicitantes atendiendo a la naturaleza jurídica de la misma.

En esta línea de pensamiento, derivado del análisis de las constancias que obran en el expediente electrónico en el que se actúa, se advirtió que la Unidad de Transparencia, turnó la solicitud a la Contraloría Interna Municipal y a la Subdirección de Recursos Humanos, como áreas competentes para conocer de la información que es del interés de la persona solicitante.

Al respecto, es preciso señalar que de conformidad con los artículos 50 del Bando Municipal, 33 y 34 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, la Subdirección de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección de Administración, es responsable proveer y administrar los recursos humanos que requieran las diversas oficinas de la administración pública municipal, teniendo entre otras atribuciones las siguientes en su parte conducente:

- **Asignar a las diversas áreas de la Administración Pública Municipal, el personal que requieran para sus funciones**, de común acuerdo con el área solicitante, consensuando los métodos, procedimientos y demás acuerdos para atender la solicitud, selección, contratación y capacitación del personal que se requiera;

- **Llevar el control y registro de los nombramientos, remociones, renuncias, cambios de adscripción,** promociones, incapacidades, vacaciones y demás incidencias **relacionadas con los servidores públicos municipales**;

- Atender las relaciones laborales, coordinándose, en su caso, con la Dirección Jurídica y Consultiva;

Por otro lado, la Contraloría Interna Municipal, de conformidad con los artículos 49 del Bando Municipal, 30 y 32 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, es el Órgano Interno de Control del ayuntamiento responsable de la supervisión y vigilancia de la gestión de la Administración Pública Municipal.

Asimismo, a través de la Subcontraloría de Responsabilidades Administrativas, lleva a cabo la investigación de faltas administrativas de los servidores públicos, a efecto de determinar su existencia, así como la presunta responsabilidad del infractor; sustancia y resuelve los procedimientos por faltas no graves a través de las autoridades respectivas, en los términos que dispone la Ley aplicable. Las faltas administrativas graves, serán sancionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Asimismo, por medio de la Subcontraloría de Cumplimiento de Obligaciones, vigila que los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar la Declaración de Intereses y Situación Patrimonial en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

De conformidad con el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, la Contraloría Interna Municipal cuenta con las siguientes atribuciones en su parte conducente:

- Conocer, investigar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos mediante su Autoridad Investigadora, Autoridad Substanciadora y Autoridad Resolutora, así como establecer e imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos, particulares y ex servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa no grave, en los términos de la Ley respectiva; tratándose de faltas graves después de la audiencia se remitirá al Tribunal de justicia administrativa del Estado de México para la resolución respectiva “Sala Especializada en Materia Administrativa”.

- La Contraloría Interna Municipal, **podrá supervisar y vigilar sin interrumpir sus labores o encomiendas, el actuar de los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,** **ya sean éstos administrativos u operativos** con el fin de que se conduzcan apegados a los principios de igualdad, imparcialidad, honradez, legalidad, buena fe, respeto, eficacia y eficiencia. **En el caso de que se determine alguna conducta contraria a dichos principios realizará el acta administrativa que corresponda mediante la Autoridad Investigadora adscrita a la Contraloría Interna Municipal informando de manera inmediata a la Comisión de Honor y Justicia**, **quien deberá iniciar el procedimiento administrativo que corresponda, debiendo informar al Órgano de Control Interno;**

- Conocer de las conductas graves y no graves en que incurran los Delegados, Subdelegados e integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana y aquellas nombradas y reconocidas legalmente por éste H. Ayuntamiento, y en su caso proponer al Cabildo las sanciones o recomendaciones que conforme a derecho procedan;

- Iniciar y tramitar de oficio y/o a petición de parte, por denuncia o derivado de auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o en su caso de auditores externos, en todas y cada una de sus etapas procesales, los procedimientos administrativos, así como aquellos que se deriven de la presentación de denuncias anónimas y particulares emitiendo la Autoridad resolutora, la resolución que corresponda, imponiendo las sanciones que procedan en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y demás ordenamientos relativos a la materia, asimismo turnar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para la resolución de las faltas administrativas graves y faltas de particulares, con independencia de las conductas que se pudieran tipificar como delitos graves;

- Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, y la Subdirección de Recursos Humanos dependiente de la Tesorería Municipal para la expedición de constancias de no inhabilitación y del registro patrimonial de los servidores públicos;

Por otro lado, es de suma importancia mencionar que la Comisión de Honor y Justicia, de conformidad con el artículo 160 de la Ley de Seguridad del Estado de México, es un órgano colegiado que tendrá como atribución llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, los procedimientos en los que se resuelva la suspensión temporal, separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los elementos policiales de conformidad con lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando incumplan:

I. Con los requisitos de permanencia que se establecen en la Ley General, la Ley Local y demás disposiciones legales aplicables;

II. Con las obligaciones establecidas en la Ley General, la Ley Local y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar; y

III. Con el régimen disciplinario establecido en esta Ley.

Asimismo, la Comisión de Honor y Justicia cuenta con el deber de **implementar una** **base de datos en la que se registrarán las sanciones impuestas a los integrantes de las Instituciones Policiales.**

En tal contexto, las instituciones policiales, es decir, los cuerpos de policía y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal, que realicen funciones similares; deben establecer una Comisión de Honor y Justicia, cuya integración se encuentra regulada por el artículo 161 de la Ley de Seguridad del Estado de México.

Como puede advertirse, si bien la Unidad de Transparencia turnó la solicitud para su atención a la Subdirección de Recursos Humanos y la Contraloría Interna Municipal, las cuales cuentan con atribuciones que les facultan para conocer la información que es del interés de la persona solicitante, el procedimiento de búsqueda estipulado en la ley de transparencia no puede tenerse por agotado, ya que de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa se desprende que omitió turnarla a la Comisión de Honor y Justicia, la cual está facultada para conocer de las sanciones impuestas a los a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que incumplan con alguno de los requisitos de permanencia, así como las obligaciones establecidas en la normativa que rigen su actuar o con el régimen disciplinario.

Ahora bien, respecto del **punto 1** de la solicitud, referente a las adscripciones y cargos que han ostentado las nueve personas referidas en la solicitud, es oportuno recordar que la Subdirectora de Recursos Humanos, manifestó que de la búsqueda exhaustiva, minuciosa y razonable en el sistema de nómina del ayuntamiento el cual contiene información desde el año dos mil, no había localizado información de ocho de ellas, al no encontrar los nombres de las mismas dentro del personal activo.

En este tenor, se precisa que lo manifestado por la servidora pública habitada, en respuesta a la solicitud de información, en el ámbito de sus competencias, se constituye en una expresión en sentido negativo, esto es, niegan la existencia de información alguna relacionada con ocho, de las nueve personas referidas en la solicitud, al no obrar en sus archivos indicio de que las mismas sean personal activo, derivado de la búsqueda exhaustiva efectuada en los mismos.

Por lo que, al considerarse como hecho negativo, resulta obvio que el **Sujeto Obligado** no puede tener en sus archivos información que satisfaga el requerimiento de información respecto de las ocho personas que señaló la servidora pública habilitada, ya que no puede probarse por ser lógica y materialmente imposible, sirve de sustento la siguiente Tesis[[1]](#footnote-0) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que es del tenor literal siguiente:

***“HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACIÓN.*** *Tratándose de un hecho negativo, el Juez no tiene por que invocar prueba alguna de la que se desprenda, ya que es bien sabido que esta clase de hechos no son susceptibles de demostración.”*

En consecuencia, no es procedente la entrega de documento alguno, o en su caso, el Acuerdo de Inexistencia, toda vez que el pronunciamiento de la servidora pública habilitada declara en automática la inexistencia de la información solicitada respecto de las ocho personas que señaló, de modo que no existe obligación de justificar o allegar pruebas, y por ende no tiene aplicación lo estatuido en el artículo 49 fracción XIII de la Ley de la Materia.

Consecuentemente, el pronunciamiento de la servidora pública habilitada es suficiente para tener por atendido el requerimiento de información en estudio, respecto de los cargos y adscripciones actuales de dichas personas, al no encontrarse adscritos al **Sujeto Obligado** a la fecha de presentación de la solicitud, siendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre, en sentido contrario, no están obligados a proporcionar lo que no tengan en sus archivos.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la pretensión de la persona solicitante consiste en conocer también los cargos y áreas de adscripción anteriores, y de la lectura de la respuesta emitida, no se advierte que la servidora pública habilitada se hubiera pronunciado respecto de si las ocho personas referidas en algún momento fueron servidores públicos adscritos al **Sujeto Obligado,** y fueron dados de baja.

Sobre lo anterior, el artículo 1.8, fracción IX, del Código Administrativo del Estado de México, establece que para que un acto administrativo tenga validez, deberá guardar congruencia con lo solicitado; asimismo, resulta necesario traer a colación, el Criterio de Interpretación, con clave de control SO/002/2017, de la Segunda Época, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que señala lo siguiente:

*“****Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.*** *De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.”*

Del citado criterio, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse al Principio de Congruencia, el cual implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado y la respuesta entregada; por lo que, se considera que el **Sujeto Obligado** incumplió con dicho principio, pues no se pronunció sobre la existencia de información de las ocho personas referidas en respuesta, en los registros de personal dado de baja, por lo tanto, es claro que el derecho de acceso no puede tenerse por satisfecho.

En este orden de ideas, es necesario que el **Sujeto Obligado** realice una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de las áreas que resulten competentes, y para el caso de localizar información respecto de las ocho personas referidas en respuesta como parte del personal dado de baja en la administración pública municipal 2022-2024, deberá hacer entrega del soporte documental en versión pública de ser necesario, en el que conste la trayectoria laboral de estas, pudiendo ser de manera enunciativa más no limitativa, el nombramiento, el Formato Único de Movimiento de Personal o documento análogo, curriculum vitae, o cualquier registro generado, administrado y/o poseído por el área competente, que dé cuenta de ello.

No obstante, para el caso de que no se llegara a localizar información derivado de la búsqueda que se ordena, al NO haber laborado en el **Sujeto Obligado** en algún momento, las ocho personas faltantes referidas, bastará con que así se haga del conocimiento de la persona solicitante para tener por colmado su derecho de acceso a la información, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

*“****Artículo 19****…*

*En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia.”*

Es improcedente, en tal supuesto, la entrega de documento alguno, o en su caso, el Acuerdo de Inexistencia, toda vez que el pronunciamiento del **Sujeto Obligado** declararía en automática la inexistencia de la información solicitada de modo que no existe obligación de justificar o allegar pruebas, y por ende no tiene aplicación lo estatuido en el artículo 49, fracción XIII[[2]](#footnote-1) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Por otro lado, derivado de la búsqueda efectuada, la servidora pública habilitada de la Subdirección de Recursos Humanos **localizó información de la primera de las nueve personas referidas en la solicitud**, manifestando que esta se desempeñaba como elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, razón por la cual restringió el Derecho de acceso a la información solicitada, argumentando que las funciones de seguridad pública deben ser clasificadas como reservadas, en virtud de que revelar dicha información podría comprometer la seguridad pública del municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Al respecto debe decirse que por regla general, toda la información que generen, administren y/o posean los Sujetos Obligados, es considerada información pública, pues al ser entes que ejercen recursos públicos tienen la obligación de rendir cuentas y asumir responsabilidades ante los ciudadanos derivado del ejercicio de sus atribuciones, garantizando así el Derecho humano de acceso a la información pública, sin embargo, dicho derecho puede ser restringido de manera excepcional por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por la Ley, como se desprende del artículo 91 de la Ley de la Materia que es del tenor literal siguiente:

***“Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.”*

Es importante mencionar que la restricción al derecho de acceso a la información implica necesariamente una clasificación, la cual debe entenderse como el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con las normas aplicables.

Así, se entiende como información reservada aquella que se clasifica de manera temporal cuya divulgación pueda causar algún daño; y como información confidencial, la relacionada con los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponde a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, así como la información privada contenida en documentos públicos o privados que refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso público.

Debe decirse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, define como **información reservada** a la información pública clasificada con este carácter de manera temporal por las disposiciones de la Ley de la Materia, cuya divulgación puede causar daños a las seguridad pública, y como **información confidencial**, la relacionada con los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, así como la información privada contenida en documentos públicos o privados que refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso público.

En relación con las implicaciones anteriores, cabe considerar que los titulares de las áreas son los responsables de clasificar la información mediante el Comité de Transparencia por ser la autoridad máxima al interior de los Sujetos Obligados, al ser éste un Cuerpo Colegiado que se integra para resolver sobre la información que debe clasificarse, así como para atender y resolver los requerimientos de las Unidades de Transparencia y del Instituto.

La misma norma referida, considera en su artículo 140, que el acceso a la información pública será restringido excepcionalmente por razones de interés público, cuando ésta sea clasificada **como reservada porque se comprometa las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes**.

Asimismo, la Ley de la Materia establece que la clasificación de la información como reservada permanecerá con tal carácter hasta por un periodo de cinco años contados a partir de su clasificación, salvo que antes de su cumplimiento dejarán de existir los motivos de su reserva, pero excepcionalmente y con aprobación del Comité de Transparencia los Sujetos Obligados podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales, por una sola vez, siempre y cuando justifiquen que subsistente las causas que dieron origen a su clasificación.

Ahora bien, para motivar la clasificación de la información o en su caso, la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta a los supuestos previstos en el artículo 140 de la Ley de Transparencia en la entidad, debiendo en todo momento aplicar la prueba de daño y hacer mención del plazo al que estará sujeto la reserva.

Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada, ya que dicha clasificación, ya sea parcial o total, debe estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en la ley de la materia, resaltando que se debe realizar conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la enunciada prueba de daño.

En tal contexto, en términos generales, las Leyes de la materia disponen que, para proceder a realizar la reserva de la información, no basta que se refiera a alguno de los supuestos que enmarque la Ley, sino que es necesario que la autoridad demuestre que la divulgación de la información, puede afectar, poner en riesgo o dañar el interés público protegido, mediante elementos objetivos que evalúen si existe un riesgo actual e inminente, siguiendo los parámetros exigidos de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los artículos 91, 128, 129, 140 y 141, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y los Capítulos II y V de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Corolario a lo anterior, es de precisar que la clasificación de la información no se da por el simple mandato de la Ley, sino que es necesario que los Sujetos Obligados**,** cuando clasifiquen algún documento o información, ya sea todo o en parte, atiendan lo dispuesto por la Ley de la materia, siendo que dicha clasificación es un trabajo en conjunto tanto de los Servidores Públicos Habilitados, de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados, teniendo el deber los primeros de ellos de presentar ante la Unidad de Transparencia la propuesta de la clasificación de la información, para que luego, de así resultar procedente el proyecto de clasificación de la información se presente ante al Comité de Transparencia, y que finalmente, sea este último quien apruebe, modifique o revoque la misma, como se desprende de los artículos 49 fracciones II y VIII, 53 fracción X, y 59 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuyo sentido literal es el siguiente:

***“Artículo 49.******Los Comités de Transparencia*** *tendrán las siguientes atribuciones:*

***…***

***II****. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados*

*…*

***VIII.*** *Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información…”*

*“****Artículo 53.*** *Las* ***Unidades de Transparencia*** *tendrán las siguientes* ***funciones****:*

***X.*** *Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información…”*

***“Artículo 59.*** *Los* ***servidores públicos habilitados*** *tendrán las* ***funciones*** *siguientes:*

***…***

***V.*** *Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta…”*

En el caso particular, el **Sujeto Obligado** no remitió el Acuerdo del Comité de Transparencia mediante el cual, de manera fundada y motivada, se clasificara la información como reservada, es evidente que no se encuentra justificada la restricción al Derecho humano de acceso a la información pública de la persona solicitante.

No obstante, no pasa desapercibido para este Organismo Garante que el motivo por el cual la servidora pública habilitada restringió el Derecho de acceso, se debe a que la persona de la cual se localizó información, se desempeña como elemento en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, por lo que es importante señalar que la información que ponga en riesgo a los integrantes de las corporaciones policiacas, es susceptible de ser clasificada como reservada, esto es así derivado de las funciones encomendadas en términos del artículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las cuales comprende la prevención de los delitos, investigación y persecución para hacerla efectiva, lo cual permite proteger los datos de los servidores públicos que integran la Dirección de Seguridad Pública de los Ayuntamientos o su equivalente, **sólo por cuanto hace al nombre** de los servidores públicos de la Policía Municipal **que desempeñen funciones operativas,** dejando intocable aquella información que por su naturaleza conciernen a la ciudadanía, como por ejemplo el rubro de percepciones, por referirse a recursos de carácter público; circunstancia que en nada afecta al derecho tutelado por este Organismo Garante sino por el contrario también reafirma su compromiso con la rendición de cuentas del Estado y la protección a grupos vulnerables de acuerdo al cargo de seguridad Municipal.

En este sentido, ha sido criterio sostenido por el Pleno de este Instituto que la información **de los elementos que realizan funciones operativas, entre ella su nombre, deben ser protegidos** con la finalidad de evitar la identificación de las personas al amparo de la protección a la vida, salud y seguridad; porque los miembros de las instituciones policiales o que realizan actividades operativas en materia de seguridad pública, **se encuentran en un régimen de excepción a diferencia de los servidores públicos con funciones administrativas**, ello obedece a que el sólo ejercicio de las funciones que tienen encomendadas lleva implícito el riesgo a su integridad, toda vez que son responsables de procurar el orden, la estabilidad y la defensa de la sociedad a la que pertenecen, lo que se traduce en la prevención de delitos y combate a los delincuentes.

Es importante mencionar que la causal de reserva antes señalada, puede ubicarse en los supuestos previstos por los artículos 140 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a su vez se vincula con la diversa del artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los requisitos previstos por los numerales Vigésimo tercero y Trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, al aplicar la prueba de daño correspondiente.

Como se ha referido es procedente la clasificación del nombre de los servidores públicos con cargos operativos, como información reservada, con el fin de no poner en riesgo su vida, salud y seguridad, dado que los hace identificables, y para no comprometer el cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad pública, o bien, la consecución de la investigación de probables hechos delictivos y/o faltas administrativas; así como evitar que células delictivas neutralizar las acciones en materia de seguridad pública para la preservación del orden y la paz pública, por lo que, no se trata de una medida desproporcional, ni excesiva. Cabe señalar que dicho supuesto no es aplicable para el caso del personal adscrito a las Direcciones de Seguridad Pública municipal o equivalentes, que desempeñe funciones administrativas, o bien, personal con funciones operativas que hubiera sido dado de baja, en cuyos casos, el nombre de esos es información susceptible de entrega.

Sin embargo, en el presente asunto **fue la persona solicitante quien proporcionó los nombres de las personas de las cuales requería información**, por lo que el **Sujeto Obligado,** en aras de no poner en riesgo la integridad de la persona que se ostenta como elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, debió clasificar, como información confidencial, el pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto de si la persona de la cual se localizó información, se encontraba adscrita a la fecha de presentación de la solicitud, no obstante, al haber referido que esta se ostenta como elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito le hizo identificable, por lo que a nada práctico llevaría en estos momentos ordenar dicha clasificación, puesto que la información ya es del conocimiento de la persona solicitante.

En tal contexto, en términos de lo previsto en el artículo 190 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se ordenadar vista a la Secretaría Técnica del Pleno a efecto de que ejerza las atribuciones previstas en la normatividad aplicable y comunique al Órgano Interno de Control competente para que este último, en ejercicio de sus atribuciones resuelva lo conducente y determine en su caso el grado de responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada ley.

Asimismo, cabe señalar que l**a respuesta de la servidora pública habilitada atiende parcialmente el requerimiento de información dado que precisó el área de adscripción del servidor público a la fecha de presentación de la solicitud**, es decir, **al cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro**, sin embargo, omitió señalar de manera clara, los cargos que ostentó desde su ingreso al ayuntamiento, así como las áreas de adscripción; por consiguiente, se estima dable ordenar la entrega del soporte documental que dé cuenta de su trayectoria laboral hasta antes del cargo que ostentaba al cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, en versión pública de ser necesario, para tener por satisfecho el punto 1 de la solicitud.

Por otro lado, respecto de las denuncias administrativas y/o penales, y sanciones disciplinarias o administrativas del servidor público adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, y las ocho personas referidas en la solicitud, como ya se precisó en líneas anteriores, la Administración Pública Municipal es normativamente regulada por el Bando Municipal, el cual señala, que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el gobierno municipal se auxiliará de las dependencias y entidades que tenga a bien aprobar el Ayuntamiento, entre ellas, la Contraloría Interna Municipal, responsable de la supervisión, evaluación, operación y funcionamiento de las Dependencias, respecto de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos municipales, en sus etapas de investigación, substanciación y resolución, sin embargo, en el presente asunto, el servidor público habilitado limitó el derecho de acceso de la persona solicitante, bajo el argumento de que no podía proporcionar la información al no contar con el RFC de las personas referidas, por lo que era posible entregar información de homónimos, sin embargo, en dicho supuesto, lo conducente sería hacer entrega de la información de la o las personas adscritas al ente público bajo el o los nombres que los solicitantes señalaran, en caso de ser procedente, por lo que en el presente caso la restricción no se encuentra justificada.

De igual forma, no debe perderse de vista que la Unidad de Transparencia no turnó la solicitud a la Comisión de Honor y Justicia, cuyo secretario, de conformidad con el artículo 161, fracción II de la Ley de Seguridad del Estado de México, es el titular del jurídico.

Asimismo, el artículo 64 del Bando Municipal, dispone que la Dirección Jurídica y Consultiva, es área especializada en el Derecho que da asistencia legal al ayuntamiento, así como a todas y cada una de las áreas que integran la Administración Pública Municipal, incluyendo a los organismos públicos descentralizados, validando los procedimientos administrativos que estas instauren.

Mientras que el artículo 57 del Reglamento Interno, dispone que la Dirección Jurídica y Consultiva cuenta con las siguientes atribuciones en su parte conducente:

- Patrocinar como abogado, a través del personal a su cargo, al Municipio, al H. Ayuntamiento y a las dependencias de la Administración Pública Municipal.

- **Intervenir** en los juicios fiscales, administrativos, laborales, civiles y **penales,** así como recursos y juicios de amparo promovidos **en contra de actos de las autoridades Municipales,** de conformidad con las legislaciones aplicables,

- **Coadyuvar con el Ministerio Público en toda carpeta de investigación, en aquellos asuntos en los que sea parte el Municipio, el Ayuntamiento o cualquiera de sus áreas;**

De tal manera que, se advierte que el ayuntamiento, a través de la Contraloría Interna Municipal y la Dirección Jurídica y Consultiva, es competente para poseer, generar y administrar la información solicitada, es decir, procedimientos de responsabilidad administrativa y denuncias penales, en trámite y concluidos, procedimientos de investigación, informes de responsabilidad administrativa presentados ante las autoridades Substanciadora y Resolutora, así como, las sanciones impuestas.

Acotado lo anterior, es dable señalar que de conformidad con el artículo 92, fracción XXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los sujetos obligados deben poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas, entre ellos, el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, en donde se especifique la causa de sanción y la disposición, como se lee en seguida,

*"****Artículo 92****. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*...*

***XXII****.* ***El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas****, especificando la causa de sanción y la disposición;"*

No obstante, **sólo pueden ser dadas a conocer las responsabilidades administrativas** **por faltas graves**. Lo anterior, con motivo de la entrada en vigor de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios publicada en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el treinta de mayo de 2017, que establece que **las sanciones no graves no serán públicas**, toda vez que dicha información únicamente es de interés para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ayuntamiento, Organismos Auxiliares, Fideicomisos Públicos y los Órganos Constitucionalmente Autónomos, en virtud de que exclusivamente se deriva de la relación entre autoridades administrativas y el dueño de los datos personales, para acatar las disposiciones contenidas en el artículo 53 de la citada Ley Anticorrupción y que son de la literalidad siguiente:

***“Artículo 53. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones*** *para ser contratados como servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.*

*Los registros de* ***las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas.****”*

En ese sentido es importante, referir que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, vigente, señala como faltas administrativas graves y no graves, lo siguiente:

*“****Artículo 3****. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
...*

***XIII.******Falta administrativa no grave****: A las faltas administrativas de los servidores públicos en los términos de la presente Ley, cuya imposición de la sanción corresponde a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México y a los órganos internos de control.*

***XIV****.* ***Falta administrativa grave****: A las faltas administrativas de los servidores públicos catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México..."*

La Ley de Responsabilidades Administrativas vigente, contempla como faltas administrativas no graves, las cometidas por el servidor público que con sus actos u omisiones, incumpla o transgreda sus obligaciones, entre las que se pueden englobar las establecidas en el artículo 50 de la Ley de responsabilidades en mérito:

***“Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que con sus actos u omisiones, incumpla o transgreda las obligaciones siguientes:***

***I.*** *Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos, a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere esta Ley.*

***II.*** *Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas en términos del artículo 95 de la presente Ley.*

***III.*** *Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 95 de la presente Ley.*

***IV****. Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en su caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley.*

***V****. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables.*

***VI****. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.*

***VII****. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso que el contratista sea persona jurídica colectiva, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto de los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. Para efectos de la presente Ley, se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas jurídicas colectivas.*

***VIII****. Actuar y ejecutar legalmente con la máxima diligencia, los planes, programas, presupuestos y demás normas a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados.*

***IX****. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado y responsabilidad o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas.*

***X.*** *Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas y servidores públicos con los que tenga relación con motivo de éste.*

***XI.*** *Observar un trato respetuoso con sus subalternos.*

*XII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de esta Ley.*

***XIII.*** *Cumplir con la entrega de índole administrativo del despacho y de toda aquella documentación inherente a su cargo, en los términos que establezcan las disposiciones legales o administrativas que al efecto se señalen.*

***XIV.*** *Proporcionar, en su caso, en tiempo y forma ante las dependencias competentes, la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos económicos federales, estatales o municipales, asignados a través de los programas respectivos.*

***XV.*** *Abstenerse de solicitar requisitos, cargas tributarias o cualquier otro concepto adicional no previsto en la legislación aplicable, que tengan por objeto condicionar la expedición de licencias de funcionamiento para unidades económicas o negocios.*

***XVI.*** *Cumplir con las disposiciones en materia de Gobierno Digital que impongan la Ley de la materia, su reglamento y demás disposiciones aplicables.*

***XVII.*** *Utilizar las medidas de seguridad informática y protección de datos e información personal recomendada por las instancias competentes.*

***XVIII.*** *Cumplir oportunamente con los laudos que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o cualquier de las Salas Auxiliares del mismo, así como pagar el monto de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público, y*

***XIX.*** *Las demás que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas aplicables.”*

De la misma manera, el artículo 51 de la Ley de Responsabilidades Administrativas indica que **también serán consideradas faltas administrativas no graves, los daños y perjuicios** que **de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves**, **cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público**, siendo de suma importancia mencionar que la autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda **cuando el daño o perjuicio** a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos **no exceda de dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado**, tal como se lee en seguida:

*“****Artículo 51.*** *También se considerará* ***falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves*** *señaladas en el Capítulo siguiente,* ***cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público.***

*Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio del ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente por parte del Órgano Superior de Fiscalización o de la autoridad resolutora.*

*En caso de no realizar el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, éstos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México deberá ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*La* ***autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda*** *conforme al artículo 79 de esta Ley* ***cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado****.”*

En otras palabras, **los daños y perjuicios que cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público**, también **podrán ser considerados como una falta no grave**, para lo cual se deben actualizar los siguientes supuestos:

1. El daño o perjuicio se hubiera ocasionado de manera culposa o negligente, esto es sin dolo.

2. No debe incurrir en alguna de las faltas administrativas graves.

3. No exceda de dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

4. El daño haya sido resarcido o recuperado.

En caso contrario, los daños o perjuicios **se considerarán como faltas graves**.

En cuanto a las faltas administrativas graves, la Ley de Responsabilidades determina que serán consideradas las siguientes:

***“Artículo 52. Para efectos de la presente Ley, se consideran faltas administrativas graves de los servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, las siguientes:***

***I.*** *El cohecho.*

***II.*** *El peculado.*

***III****. El desvío de recursos públicos.*

***IV****. La utilización indebida de información****.***

***V****. El abuso de funciones.*

***VI****. Cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual.*

***VII.*** *El actuar bajo conflicto de interés****.***

***VIII****. La contratación indebida.*

***IX.*** *El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.*

***X****. El tráfico de influencias.*

***XI.*** *El encubrimiento.*

***XII.*** *El desacato.*

***XIII.*** *La obstrucción de la Justicia.”*

Por otro lado, el procedimiento para la imposición de sanciones a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que incumplan con alguno de los requisitos de permanencia, las obligaciones establecidas que rigen su actuar o con el régimen disciplinario, se encuentra regulado en el Capítulo Séptimo del Título Séptimo Del Desarrollo Policial de la Ley de Seguridad del Estado de México, de donde destaca lo siguiente para el tema que nos ocupa:

- La Unidad de Asuntos Internos integrará el expediente que sustente la irregularidad y lo remitirá a la brevedad a la Comisión de Honor y Justicia.

- La Comisión de Honor y Justicia, cuando le sea remitido un expediente, abrirá un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente.

- De ser procedente, la Comisión de Honor y Justicia, iniciará procedimiento administrativo al elemento policial, asignándole al expediente correspondiente un número progresivo e incluirá el año que se inicia. El número se anotará en todas las promociones y actuaciones que se produzcan con el mismo.

- El procedimiento terminará por:

I. Convenio; y

II. Resolución expresa del mismo.

- La resolución expresa que ponga fin al procedimiento indicará:

I. Nombre del servidor público;

II. La determinación que podrá ser de: remoción, baja, cese, sobreseimiento o resolución sin sanción;

III. Los fundamentos y motivos que la sustenten; y

IV. El nombre, cargo y firma de los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia.

- Cuando se impongan **sanciones administrativas**, la motivación de la resolución considerará las siguientes circunstancias:

I. La gravedad de la infracción en que se incurra;

- Las resoluciones sancionadoras podrán ser impugnadas mediante el Recurso Administrativo de Inconformidad, ante el Titular de la Institución Policial correspondiente o a través del juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro de los quince días posteriores al en que surta efectos la notificación de la resolución.

Por lo que se refiere al régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones policiales, Capítulo Octavo del Título Séptimo Del Desarrollo Policial de la Ley de Seguridad del Estado de México, dispone lo siguiente en su parte conducente:

- El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y los ordenamientos legales aplicables, y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

- **La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor**.

La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.

- Por incumplimiento al régimen disciplinario a que se refiere este Capítulo y en atención a la gravedad de la infracción, se aplicarán los siguientes correctivos disciplinarios o sanciones:

I. Amonestación pública;

II. Amonestación privada;

III. Arresto, hasta por treinta y seis horas; y

IV. Suspensión temporal, hasta por quince días.

Las sanciones a que se refieren las fracciones I, II y III serán impuestas por el jefe inmediato del servidor público infractor.

Por lo que respecta a la sanción establecida en la fracción IV, será impuesta por la Comisión de Honor y Justicia, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

La amonestación es el acto por el cual el jefe inmediato advierte al elemento policial, de manera pública o privada, la omisión o falta de cumplimiento de sus deberes, invitándolo a corregirse. La amonestación será de palabra y constará por escrito en un acta mínima que deberá ser remitida la Comisión de Honor y Justicia para su registro en la base de datos correspondiente y a la unidad administrativa para que se anexe al expediente personal del servidor público.

El arresto es el impedimento del elemento policial para abandonar su centro de trabajo, por haber incurrido en faltas considerables o por haber acumulado cinco amonestaciones en un año calendario; en todo caso la orden de arresto deberá hacerse por escrito, especificando el motivo y la duración de la misma.

La suspensión temporal será sin goce de sueldo, teniendo por objeto evitar afectar el proceso de investigación y permitir preservar los medios, cosas, objetos y personas, hasta la culminación y determinación de la responsabilidad que en su caso resulte.

El artículo 188 de la Ley de Seguridad del Estado de México, dispone que **en aquellos casos en los cuales se desprenda la existencia de actos y omisiones que puedan ser constitutivos de hechos delictuosos, las Comisiones de Justicia deben proceder de inmediato a hacerlo del conocimiento del Ministerio Público**.

Conforme a lo anterior, es de recordar que la pretensión de la parte **Recurrente,** es conocer la existencia de denuncias administrativas y/o penales, así como las sanciones administrativas o disciplinarias en contra de las nueve personas referidas en la solicitud al cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, sin importar si los procedimientos de responsabilidades administrativas o denuncias penales están en trámite o concluidos.

En referencia a lo anterior, y de la naturaleza específica de lo solicitado, se procede marcar la pauta sobre la respuesta que en el caso debe proporcionar el **Sujeto Obligado:**

* **De los procedimientos sobre faltas administrativas que se encuentren en trámite.**

Al respecto es necesario mencionar que el realizar un pronunciamiento sobre la existencia de un procedimiento de posibles responsabilidades **en trámite**, podría afectar a las personas identificadas en la solicitud de información, **pues se daría a conocer la existencia de una investigación en su contra, lo cual, generaría una percepción negativa de estas, sin que se hubiere probado su responsabilidad o culpabilidad, lo cual dañaría, su honor y su derecho a la presunción inocencia e inclusive su actividad profesional, pues aún no se juntan los elementos necesarios para iniciar la segunda etapa del procedimiento**.

En otras palabras, dar a conocer la existencia de un procedimiento de posibles responsabilidades en trámite, vulneraría la protección de su privacidad, honor y presunción de inocencia, ya que podría generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que se tenga una determinación firme, donde haya quedada acreditada su responsabilidad.

Respecto del **derecho a la privacidad**, se trae a colación la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, de mayo de 2008, página 229, de la Novena Época, materia constitucional, misma que a la letra señala:

*“****DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS****. Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.”*

Como se observa, de la garantía de seguridad jurídica de los individuos a no ser molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir, en el artículo 16, primer párrafo constitucional, se da el reconocimiento de un derecho a la privacidad de las personas que implica no ser sujeto de injerencias arbitrarias, intromisiones o molestias en el ámbito reservado de su vida o intimidad, ni de ataques a su honra o a su reputación, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Por lo que hace al **derecho al honor**, la jurisprudencia número 1a./J. 118/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 3, de febrero de 2014, página 470, de la Décima Época, materia constitucional, señala:

***“DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.*** *A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir al honor como el* ***concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social****. Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros.”*

Como se observa, el honor es el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.

En el ámbito de lo jurídico, es un Derecho humano que involucra la facultad de cada individuo de ser tratado de forma decorosa. Este derecho tiene dos elementos, el subjetivo, que se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad, y en un sentimiento objetivo, que es la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. **En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece.**

Adicionalmente, en relación a este derecho [al honor], el máximo tribunal también ha señalado que aunque no esté expresamente contenido en la Carta Magna, ésta obliga su tutela en términos de lo previsto en el artículo 1° Constitucional, como se muestra en la tesis aislada número I.5o.C.4 K (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, Libro XXI, de junio de 2013, página 1258, de la Décima Época, materia constitucional, de rubro y texto siguiente:

*“****DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. CONSTITUYEN DERECHOS HUMANOS QUE SE PROTEGEN A TRAVÉS DEL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL.*** *Si conforme a las características que conforman a los derechos humanos, éstos no recaen sobre cosas materiales, sino que otorgan acción para lograr que el Estado respete los derechos garantizados, y se consideran esenciales e inherentes al ser humano y derivados de su propia naturaleza, resulta lógico que los atributos de la personalidad se enlacen directamente con tales derechos, pues los mencionados atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por los derechos del hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular, quien nace con ellos, y el Estado debe reconocerlos. Como no recaen sobre bienes materiales, sino sobre la personalidad de los individuos, son generales porque corresponden a todos los seres humanos, y no pueden considerarse renunciables, transmisibles o prescriptibles, porque son inherentes a la persona misma, es decir, son intrínsecos al sujeto quien no puede vivir sin ellos. Ahora, del contenido expreso del artículo 1o. constitucional se advierte que nuestro país actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, mediante el reconocimiento claro del principio pro personae, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, aunado a que también precisa de manera clara la obligación de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas en las que se vea involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la personalidad conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en casos en los que se involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la personalidad -en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta Magna, con independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional hacia la salvaguarda concreta del citado atributo, pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de ordenamientos superiores -Constitución y tratados internacionales- con los que cuenta el Estado Mexicano.”(Sic)*

Tocante a la **presunción de inocencia,** es de mencionar que toda persona imputada tiene, entre otros, el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, donde compruebe su culpabilidad. tal como lo prevé la fracción I del apartado B, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 5, página 497, de abril de 2014, Décima Época, materia constitucional, de rubro y texto siguiente:

*“****PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL****. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de ‘poliédrico’, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena.”*

De la jurisprudencia transcrita deviene que la presunción de inocencia se traduce en el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena, siendo importante mencionar que dicho Derecho se encuentra regulado, de la misma manera, en Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el mismo orden de ideas, la tesis aislada número 2a. XXXV/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, de mayo de dos mil siete, página 1186, de la Novena Época, materia constitucional y penal, establece:

***“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.*** *El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia.”*

Como se observa, el Alto Tribunal sostiene que el principio de presunción de inocencia va más allá del ámbito estrictamente procesal, en aras de proteger la esfera jurídica de las personas que se ve en peligro ante actuaciones arbitrarias por parte del poder público. Así, dicho principio guarda también una faceta “extraprocesal” que se materializa a través de un trato de inocente para el inculpado mientras no se demuestre su culpabilidad.

Conforme a lo expuesto, **pronunciarse sobre la existencia de un procedimiento en trámite de probable responsabilidad, generaría un juicio a priori o un juicio negativo en contra de las personas referidas en las solicitudes por parte de la sociedad, sin que se hayan reunido los elementos para establecer si son o no responsables, vulnerando así la protección de su intimidad, su honor, la buena imagen y su Derecho a la presunción de inocencia.**

Bajo lo previo, se considera que **el pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo, sobre la existencia de algún procedimiento en trámite de responsabilidad por faltas graves o no graves que se hubiera iniciado en contra de las personas referidas, deberá clasificarse en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,** que es del tenor literal siguiente:

*“****Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;”(Sic)*

No obstante de lo anterior, no debe perderse de vista el contenido del artículo 142, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que es del tenor literal siguiente:

***“Artículo 142.******Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado*** *cuando:*

***I.*** *Se trate de* ***violaciones graves de derechos humanos****, calificada así por autoridad competente;*

***II.*** *Se trate de la* ***investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos*** *aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;*

***III.*** *Se trate de* ***delitos de lesa humanidad*** *conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y*

***IV****. Se trate de* ***información relacionada con actos de corrupción*** *de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.”*

Del precepto citado se desprende que aquella información que se relacione con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, no puede actualizar alguno de los supuestos de clasificación como información reservada establecidos en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En el mismo tenor, el Lineamiento Trigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, dispone que no puede invocarse el carácter de reservado de la información cuando esta se trate de violaciones graves a derechos humanos; se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado mexicano, así como en las disposiciones legales aplicables; o actos de corrupción**,** en función del uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y competencias, en beneficio propio o de un tercero, por parte de un servidor público o de otra persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, y de acuerdo con las leyes aplicables y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Dicho lo anterior, cobra relevancia señalar que México ha participado, firmado y ratificado tres convenciones internacionales de combate contra la corrupción, a saber: la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA 1997), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE 1999) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU 2004).

En ese sentido, la Convención Interamericana contra la Corrupción, señala que **la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos**; asimismo, considera que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social.

En específico, en el artículo VI de dicha Convención se señalan las siguientes conductas como actos de corrupción:

a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y

e. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.

En ese orden de ideas, es posible reflexionar que **la corrupción no solo es un fenómeno que debilita a las instituciones democráticas y a la gobernabilidad, sino que también, fomenta la impunidad, socava el Estado de derecho y exacerba la desigualdad, además de que afecta a los derechos humanos**, por lo que, **cobra una relevancia social la rendición de cuentas respecto a información o hechos que estén vinculados o relacionados con actos de corrupción.**

Con base en lo anterior, y conforme a la definición de servidor público que establece tanto el artículo 108 de nuestra Constitución como el artículo 212 del Código Penal Federal reformado, es posible considerar como ***acto de corrupción***, la **acción u omisión que llevé a cabo una persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en las instituciones gubernamentales, así como por particulares con funciones públicas, en la cual, en pleno ejercicio de sus funciones, obtenga un beneficio o una ventaja de cualquier naturaleza para sí o un tercero sobre algún hecho que no sea permisible en las normas vigentes, o bien, incurra en una conducta catalogada por la Ley como acto de corrupción.**

Mientras que el Código Penal del Estado de México establece en el Título Sexto Delitos por Hechos de Corrupción, del Libro Segundo, a los siguientes:

* Incumplimiento de funciones públicas (artículo 331),
* Ejercicio indebido de función pública (artículo 332)
* Abandono de funciones públicas (artículo 333)
* Coalición (artículo 334)
* Abuso de autoridad (artículos 335, 336, 337, 338 y 339)
* Uso ilícito de atribuciones y facultades (artículo 340)
* Concusión (artículo 342)
* Intimidación (artículo 343)
* Ejercicio abusivo de funciones (artículo 344)
* Tráfico de influencia (artículo 345)
* Cohecho (artículos 347, 348 y 350)
* Peculado (artículo 351)
* Enriquecimiento Ilícito (artículo 352)

Dicha información es de gran trascendencia, ya que al estar involucrados servidores públicos existe una afectación directa al interés público en torno a las atribuciones de los entes públicos, como lo es, de manera enunciativa, más no limitativa, la administración de su patrimonio, la erogación de recursos públicos o la recaudación de contribuciones, derechos, impuestos, etcétera, lo cual afecta no sólo al ente público sino a toda la sociedad en general.

En función de lo expuesto, y considerando las conductas que pudieran ser investigadas, es que el derecho de acceso a la información cobra una relevancia trascendental para la sociedad en general, ya que a través del ejercicio de éste se puede conocer información relacionada con hechos de corrupción, que además por la importancia que ésta tiene para el erario municipal, resulta de mayor interés el impacto que dichas conductas pudieron tener en su detrimento, encuadrando en los artículos 3, fracción XXII y 9, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, este Instituto establece como:

***“Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XXII. Información de interés público:*** *Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados*

*…*

***Artículo 9.*** *El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:*

*…*

***VII. Máxima Publicidad:*** *Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática…”(Sic)*

De lo anterior, se colige que, el interés público está relacionado con el principio de máxima publicidad y las excepciones a la clasificación de la información; pues existe un interés general de la sociedad de conocer sobre los posibles actos de corrupción al no ser afectaciones que se dan en lo individual, sino que existe un detrimento en un grupo o en la población en general.

Por tal motivo, se considera para el caso de que existiera algún procedimiento relacionado con faltas administrativas en trámite, en contra de las personas referidas en la solicitud, y que esté relacionado con alguna excepción de las establecidas en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, tales como actos de corrupción, se **deberá entregar el soporte documental correspondiente que dé cuenta de la existencia de dichos procedimientos y el estado que guardan, en versión pública de ser necesario, conforme al considerando siguiente.**

Es de suma importancia mencionar que si bien entregar el pronunciamiento respecto a la existencia de un procedimiento de sanción administrativa, podría generar una percepción negativa de éste, ocasionando un perjuicio en su **honor, intimidad, buena imagen y nombre, así como a su vida privada,** también lo es, que **tratándose de asuntos relacionados con actos de corrupción, se trataría de una falta grave, por lo que tales prerrogativas quedan supeditadas al interés mayor de conocer tales eventualidades y por lo tanto no precede su clasificación en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de la materia.**

Aunado a lo anterior, cierto es que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta en tanto se demuestre lo contrario, sin embargo, en el caso de actos de corrupción nos encontramos ante un caso de trascendencia social e interés público, sobreviniendo una colisión entre derechos fundamentales, esto es, por una parte, se busca mantener la secrecía de los nombres de los servidores públicos denunciados, es decir, el nombre de las personas que enfrentan acusaciones sobre esos actos y; por otro, se pretende dar acceso a información que es de interés de los ciudadanos porque versa sobre una afectación económica al erario público.

En tal contexto, si los hechos investigados son en razón de conductas presuntamente ilegales, el ejercicio ilícito de servicio público, el uso ilícito de funciones, el cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, de personas que en el ejercicio de sus funciones públicas, causaron un detrimento y se presume obtuvieron un beneficio personal, luego entonces **existe una preferencia social mayor que trasciende para dar a conocer, precisamente los nombres de los servidores o ex servidores que enfrentan acusaciones sobre este caso, debiendo por tanto darse a conocer dicho dato, en caso de actualizarse la excepción a la excepción, prevista en el artículo 142 dela Ley de la materia, por lo que en el presente caso no se vulneran los derechos de la persona referida, aun cuando es plenamente identificada.**

A efecto de sustentar lo anterior, es aplicable por analogía la determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en la Resolución del Recurso de Revisión de Acceso con número de folio RRA 12225/22, que en su parte conducente, señala lo siguiente:

*“****ANÁLISIS DE INTERÉS PÚBLICO***

*[...]*

*Señalado lo anterior, resulta necesario realizar una ponderación de los dos intereses jurídicos tutelados que convergen en la controversia que se dirime, para lo cual, resulta pertinente traer al estudio lo señalado en el artículo 155 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual prevé que cuando exista una colisión de derechos, este Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Para estos efectos, se entenderá por:*

*∙* ***Idoneidad:*** *La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;*

*∙* ***Necesidad:*** *La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y*

*∙* ***Proporcionalidad:*** *El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.*

*En el mismo sentido, resulta aplicable la tesis I.4o.A.70 K, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, página 2346, de agosto de 2006, Novena Época, materia común:*

***“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS DEBE NEGARSE SI EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO ES PREFERENTE AL DEL PARTICULAR. Cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, se debe resolver el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad****, la cual es la legitimidad constitucional del principio adoptado como preferente, por resultar ser el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el objetivo pretendido;* ***b) necesidad****, consistente en que no exista otro medio menos limitativo para satisfacer el fin del interés público y que sacrifique, en menor medida, los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios; o sea, que resulte imprescindible la restricción, porque no exista un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin deseado y que afecten en menor grado los derechos fundamentales de los implicados; y* ***c) el mandato de proporcionalidad entre medios y fines implica que al elegir entre un perjuicio y un beneficio a favor de dos bienes tutelados, el principio satisfecho o que resulta privilegiado lo sea en mayor proporción que el sacrificado****. Esto es que no se renuncie o sacrifiquen valores y principios con mayor peso o medida a aquel que se desea satisfacer. Así, el derecho o principio que debe prevalecer, en el caso, es aquel que optimice los intereses en conflicto y, por ende, privilegiándose el que resulte indispensable y que conlleve a un mayor beneficio o cause un menor daño. Consecuentemente, tratándose de la suspensión debe negarse dicha medida cautelar cuando el interés social constitucionalmente tutelado es preferente al del particular, ya que el derecho o principio a primar debe ser aquel que cause un menor daño y el que resulta indispensable privilegiarse, o sea, el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio.”*

*Como se aprecia de la tesis citada, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, el problema se debe resolver atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, antes descritos.*

*En ese orden de ideas, resulta procedente analizar cada uno de los elementos referidos, partiendo de que, en el caso concreto, se estima como preferente el derecho de acceso a la información, bajo las consideraciones que se verterán a continuación.*

1. ***IDONEIDAD.*** *La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de una finalidad constitucionalmente válida o apta para conseguir el fin pretendido.*

*El artículo 6 constitucional, apartado A, fracción I estipula que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.*

*Conforme a dicho precepto, el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", el cual contiene una doble dimensión: individual y social.*

*∙ En aspecto individual, maximiza el campo de la autonomía personal, posibilita el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto diversidad de datos, voces y opiniones.*

*∙ Mientras que, en el social, evidencia el valor instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas.*

*Así, el derecho de acceso a la información resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*Al respecto, el interés de conocer los nombres de los servidores públicos que enfrentan acusaciones sobre estos casos evidencia el ejercicio del derecho de acceso a la información, en virtud de que se trata de un caso relacionado con presuntos hechos de corrupción cometidos con recursos públicos.*

*En ese orden,* ***si los hechos investigados son en razón de conductas presuntamente ilegales, el ejercicio ilícito de servicio público, el uso ilícito de funciones, el cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, de personas que en el ejercicio de sus funciones públicas, causaron un detrimento en el erario*** *federal a través de los recursos públicos destinados al Servicio de Administración Tributaria que dejaron de ingresar con las que* ***se presume obtuvieron un beneficio personal****, luego entonces* ***existe una preferencia social mayor que trasciende para dar a conocer, precisamente los nombres de los servidores que enfrentan acusaciones sobre este caso.***

*Por lo tanto, en el caso, prevalece el derecho de acceso a la información sobre la protección de su intimidad, honor, imagen y presunción de inocencia, toda vez que es el medio idóneo para la rendición de cuentas sobre la efectiva investigación de hechos relacionados con el desempeño de las funciones de los servidores públicos y ex servidores públicos de en relación con los hechos investigados, lo que deja en segundo lugar la necesidad individual de proteger sus nombres.*

1. ***NECESIDAD****. La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público.*

*A través del ejercicio del derecho a la información se cubre la necesidad de la colectividad de estar en posibilidad de evaluar el desempeño de las autoridades que la representan, en ese sentido, constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con las conductas denunciadas por parte del Servicio de Administración Tributaria que forman parte de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República.*

*Esto es,* ***la necesidad de la colectividad de estar en posibilidad de evaluar el desempeño de las autoridades que la representa, constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con los nombres de los servidores públicos y ex servidores públicos que enfrentan acusaciones sobre los casos denunciados, puesto que probablemente incurrieron en diversos delitos de corrupción****, tales como cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, catalogados como actos de corrupción en el Código Penal Federal, así como en la Convención Interamericana contra la Corrupción.*

*En este sentido, nuevamente el derecho de acceso a la información prevalece sobre la protección de la información solicitada, puesto que el sacrificio que implica la revelación de los nombres de los servidores públicos y ex servidores es el medio menos oneroso para que la sociedad conozca quiénes de los servidores públicos o ex servidores públicos, que supuestamente velan así por el manejo y la debida aplicación de fondos y recursos federales, probablemente están involucrados en el desvío de dichos recursos, lo cual, de ser el caso, indudablemente repercute en la economía del país, así como el nombre de cualquier otra persona involucrada en los hechos.*

*Es decir, si se negara el derecho de acceso a los datos peticionados, -en el caso concreto- se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de la actividad del sujeto obligado, en cuanto a sus facultades de investigación, en este caso, respecto de los delitos catalogados como actos de corrupción en el Código Penal Federal.*

1. ***PROPORCIONALIDAD****. El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.*

*Conforme a lo expuesto,* ***si bien se causa un perjuicio a la intimidad, honor, imagen y presunción de inocencia, de los servidores y ex servidores públicos que enfrentan acusaciones sobre diversos casos****, lo cierto es que,* ***divulgar sus nombres representa un beneficio mayor para la sociedad puesto que rinde cuentas sobre quiénes están probablemente implicados en conductas relacionadas con hechos de corrupción****.*

*Sumado a lo anterior, debemos recordar que uno de los señalamientos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, lo cual ha sido ratificado por México, es que la corrupción atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia.*

*De manera que, si la Fiscalía General de la República aperturó diversas carpetas de investigación en contra de las personas que posiblemente cometieron actos de corrupción, el hecho de que dé a conocer sus nombres, independientemente de que se encuentre en la fase de investigación, significaría rendir cuentas del compromiso del Estado Mexicano en el combate a la corrupción ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y frente a la sociedad nacional e internacional.*

*En este sentido, se robustece la necesidad de que impere el derecho de acceso a la información sobre los principios antes referidos, toda vez que es proporcional la satisfacción de la sociedad de conocer la información de interés, toda vez que, de ser el caso, la declaración de inocencia, en su momento, los liberará de los señalamientos a que haya lugar.*

*Por tanto, es posible concluir que, en la ponderación realizada, se cumple con los tres elementos para dotarle de preminencia al derecho de acceso a la información, a efecto de poder entregar la información relativa a los servidores o ex servidores denunciados pues con el análisis de interés público* ***no es posible clasificarla en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de la materia.”***

* **De los procedimientos sobre faltas administrativas concluidos.**

Como se mencionó en líneas anteriores, sólo pueden ser dadas a conocer las responsabilidades administrativas por faltas graves condenatorias, de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios que establece que **las sanciones no graves no serán públicas**, **así como las graves absolutorias,** en virtud de que dichas faltas, **no tienen una trascendencia social,** pues no existe un daño externo, sino que únicamente le atañe al servidor público en cuestión.

En este entendido, es evidente que en caso de existir procedimientos concluidos instaurados en contra de las personas identificadas en la solicitud, **por faltas graves absolutorias** y **no graves condenatorias o absolutorias**, dicha información tiene el carácter de confidencial, y por tanto debe clasificarse el pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto de su existencia, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

No obstante, si los procedimientos concluidos se relacionan con faltas administrativas **graves condenatorias** y estas han quedado firmes, es decir, que el procedimiento ya no acepta recurso o medio de defensa alguno, es procedente entregar el soporte documental a la parte **Recurrente** que dé cuenta de las sanciones impuestas, en versión pública para el caso de que el mismo contenga datos personales susceptibles de protegerse, reiterando que en dicho supuesto, no se vulnera el derecho de las personas señaladas, aun cuando estas sean plenamente identificables.

Lo anterior, ya que como se precisó en párrafos anteriores, proporcionar la información de referencia, garantizaría la rendición de cuentas por parte del **Sujeto Obligado**, relativo a su actuación, teniendo como consecuencia que los ciudadanos tengan confianza en sus autoridades, al poder conocer información derivada de los procedimientos administrativos que hayan concluido con resolución en donde se determine que un servidor público tuvo responsabilidades graves, relacionadas al ejercicio de las funciones.

Además, que, con dicha información, se estaría revelando que el desempeño de las personas referidas en su carácter de servidores públicos, en caso de haber sido sancionadas, no fue conforme a derecho.

No obstante, para el caso de que derivado de la búsqueda que se ordena, no se llegara a localizar información de procedimientos concluidos, en los que se hubiera determinado una sanción por falta grave, por no haberse generado, bastará con que así se haga del conocimiento de la persona solicitante en términos del artículo 19, párrafo segundo de la Ley de la Materia.

* **De las denuncias penales**

Respecto de las denuncias o querellas penales presentadas es necesario dejar claro que es competencia de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, a través del Ministerio Público, en el entendido de que el **Sujeto Obligado** no tiene competencia para recibir y sustanciar denuncias por la probable comisión de delitos, de acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual dispone, en sus artículos 10 y 22, que sus atribuciones corresponden a:

* Coordinar la investigación y persecución de los delitos del fuero común cometidos dentro del territorio estatal, a efecto de aplicar la ley vigente, según corresponda.
* Ejercitar la acción penal en los casos que proceda para cumplir con la legislación vigente en la materia.
* Intervenir en los procesos penales de acuerdo al ámbito de su competencia y proteger los intereses de la población del Estado, así como de aquellos a quienes la ley otorga especial protección.
* Vigilar que se lleve la estadística e identificación criminal para el pronto esclarecimiento de los delitos cometidos en el Estado de México.
* Establecer programas para la profesionalización del personal adscrito a la Fiscalía General de Justicia.
* Promover la participación ciudadana para fortalecer la procuración de justicia en el Estado.

De esta manera, el artículo 33 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, señala que el Ministerio Público es una institución única e indivisible, que funge como representante social en los intereses de quienes sean lesionadas o lesionados en sus derechos, a través de la investigación y persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales competentes. Solo en los casos establecidos en la Constitución Federal y el Código Nacional, las y los particulares podrán ejercitar acción penal directamente, y tiene como obligaciones, en su parte conducente, las siguientes:

***“Artículo 131.*** *Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:*

*…*

***II.*** *Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito;*

***III****. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma;*

*…*

***VI****. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan;*

***VII.*** *Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado;*

*…*

***XV****. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente;”*

En este orden de ideas, se advierte que **el Ministerio Público**, **es la figura que cuenta con la competencia para recibir denuncias formales sobre hechos que pueden constituir algún delito**, asimismo **cuenta con la obligación de iniciar la investigación correspondiente hasta su culminación.**

De tal suerte que, **si bien la documentación de las denuncias es competencia del Ministerio Público,** no debe perderse de vista que **el ayuntamiento está facultado a través del Órgano de Control Interno y la Dirección Jurídica y Consultiva y para presentar denuncias ante el Ministerio Público,** es decir, como parte en determinado asunto.

Bajo esta línea de pensamiento, para satisfacer el Derecho de acceso a la información de la persona solicitante, tomando como base los argumentos expuestos en líneas anteriores respecto de la presunción de inocencia, así como la protección del derecho a la privacidad y al honor**,** el **Sujeto Obligado** deberá **clasificar como confidencial, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo, sobre la existencia de alguna demanda penal que hubiera presentado en contra de las personas referidas en la solicitud, con excepción de aquellas que relacionen con los supuestos que establece el artículo 142 de la misma Ley**, en cuyo caso, deberá proceder a la entrega del soporte documental correspondiente en versión pública, conforme a lo ya expuesto.

Finalmente, es de precisar que la persona solicitante, al momento realizar su requerimiento de información, no especificó el periodo respecto del cual solicitaba la información; por lo que, se advierte que la búsqueda de la información corresponde a un año, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, es decir, del cuatro de noviembre de dos mil veintitrés al cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro; de conformidad con lo establecido en el Criterio orientador 9/13 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual se reproduce a continuación:

*“****Periodo de búsqueda de la información****,* ***cuando no se precisa en la solicitud de información.*** *El artículo 40, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala que los particulares deberán describir en su solicitud de información, de forma clara y precisa, los documentos requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo sobre el que requiere la información, deberá interpretarse que su requerimiento se refiere al del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos obligados cuenten con mayores elementos para precisar y localizar la información solicitada.”*

De lo hasta aquí expuesto, se concluye que los motivos de inconformidad de la parte **Recurrente** devienen parcialmente fundados, siendo procedente *Modificar* la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado** en términos del artículo 186 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Quinto. Versión Pública.** Finalmente, debe señalarse que de ser el caso en que los documentos que vayan a ser entregados para dar cumplimiento a la presente resolución, contengan datos que deban ser clasificados, el **Sujeto Obligado** deberá hacer la elaboración de la versión pública de tales documentos a fin de satisfacer el derecho de acceso a la información pública de la parte **Recurrente** sin menoscabo al derecho a la protección de los datos personales de terceros.

Para efectos de la elaboración de la versión pública se deberá observar lo dispuesto por los artículos 3 fracciones IX, XX, XXI y XLV, 91, 132, 137 y 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establecen:

*“****Artículo 3****. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***IX. Datos personales****: La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX. Información clasificada****: Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI. Información confidencial:*** *Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

*…*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I****. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

*…*

***Artículo 137.*** *Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.*

***…***

***Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;”*

Igualmente, lo establecido en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

Cabe señalar que la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia que la sustente el cual debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al **Sujeto Obligado** a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

Respecto a las formalidades que deberá llevar el acuerdo de clasificación que deberá emitir el **Sujeto Obligado** a través de su Comité de Transparencia, los Lineamientos Quincuagésimo, Quincuagésimo primero, Quincuagésimo segundo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas señalan lo siguiente:

***“Quincuagésimo.*** *Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán establecer sus propios modelos o formatos para la elaboración de versiones públicas de documentos o expedientes, siempre y cuando cumplan lo establecido en los presentes Lineamientos, así como en las correspondientes Leyes Generales.*

***Quincuagésimo primero.*** *Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener:*

***I.*** *El número de sesión y fecha;*

***II****. El nombre del área que solicitó la clasificación de información;*

***III****. La fundamentación legal y motivación correspondiente;*

***IV****. La resolución o resoluciones aprobadas; y*

***V****. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia.*

*Las resoluciones del Comité en las que se haya determinado confirmar o modificar la clasificación de información pública como reservada, deberán incluir, cuando menos:*

***I.*** *Los motivos y razonamientos que sustenten la confirmación o modificación de la prueba de daño;*

***II****. Descripción de las partes o secciones reservadas, en caso de clasificación parcial****;***

***III.*** *El periodo por el que mantendrá su clasificación y fecha de expiración; y*

***IV.*** *El nombre del titular y área encargada de realizar la versión pública del documento, en su caso.*

*En los casos en que se clasifique la información como reservada siempre se entregará o anexará la prueba de daño con la respuesta al solicitante.*

*En los casos de resoluciones del Comité de Transparencia en las que se confirme la clasificación de información confidencial solo se deberán de identificar los tipos de datos protegidos, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo.*

***Quincuagésimo segundo****. Para la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a asegurar que el espacio utilizado para testar la información no podrá ser empleado para la sobreposición de contenido distinto al autorizado por el Comité.*

*En el caso especifico de la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán:*

***I.*** *Fijar la fecha en que se elaboró la versión pública y la fecha en la cual el Comité de Transparencia confirmó dicha versión;*

***II.*** *Señalar dentro del documento el tipo de información confidencial que fue testada en cada caso específico, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo; y*

***III.*** *Señalar las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada.*

*En los documentos de difusión electrónica, señalar en la primera hoja y en el nombre del archivo, que la versión pública corresponde a un documento que contiene información confidencial.”*

Asimismo, deberá observar los Lineamientos Quincuagésimo cuarto, Quincuagésimo quinto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, establecen lo siguiente:

*“****Quincuagésimo cuarto.*** *Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de documentos reservados y/o confidenciales, sea total o parcialmente; se deberá anexar al expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación.*

***Quincuagésimo quinto.*** *Cada área del sujeto obligado podrá designar formalmente a una o más personas como responsables del testado, que sean encargadas de la adecuada elaboración o supervisión de las versiones públicas de los documentos o expedientes, verificando que cumplan con los requisitos señalados en las Leyes Generales, los presentes Lineamientos y demás normativa aplicable antes de su confirmación por el Comité de Transparencia.*

***...***

***Quincuagésimo séptimo****. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente:*

***I****. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables;*

***II.*** *El nombre de los integrantes de los sujetos obligados en los documentos, y sus firmas autógrafas o digitales, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y*

***III****. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos.*

*Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las leyes o en los tratados internacionales suscritas por el Estado mexicano.*

***Quincuagésimo octavo****. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas sean irreversibles, de tal forma que no permitan su recuperación o la visualización de la misma.”*

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Resultan **parcialmente fundadas** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **07494/INFOEM/IP/RR/2024**; por lo que, en términos del **Considerando** **Cuarto** de esta resolución, se **Modifica** la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado.**

**Segundo.** Se **Ordena** al **Sujeto Obligado,** en términos de los **Considerandos** **Cuarto** y **Quinto** de esta resolución, haga entrega, vía **SAIMEX**, previa búsqueda exhaustiva y razonable, en versión pública de ser necesario, de lo siguiente:

1. Del servidor público identificado **en la respuesta** a la solicitud, documento o documentos que den cuenta de su trayectoria laboral, al cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

2. De los ocho **servidores públicos faltantes,** identificados en la solicitud de información, el soporte documental en el que conste su trayectoria laboral al cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

Del cuatro de noviembre de dos mil veintitrés al cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, de los nueve servidores públicos referidos en la solicitud:

3. Documento que dé cuenta de los procedimientos de responsabilidades administrativas concluidos con sanción por falta grave, que hubieran quedado firmes, así como, de aquellos que se encontraban en trámite y que se relacionen con actos de corrupción o posibles violaciones graves a derechos humanos, de conformidad con el artículo 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

4. El Acuerdo emitido por el Comité de Transparencia, en donde de manera fundada y motivada, confirme la clasificación como información confidencial por tratarse de datos personales de acuerdo al artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, del pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo, sobre:

4.1 Procedimientos de responsabilidades administrativas:

1. La inexistencia.
2. La existencia de procedimientos en trámite (con excepción de los indicados en el punto 3).
3. La existencia de procedimientos concluidos en los que se haya determinado que no existió responsabilidad del servidor público.
4. La existencia de procedimientos concluidos en los que se haya determinado sanción por falta no grave.

4.2. La existencia o inexistencia de denuncias penales presentadas por el Sujeto Obligado, con excepción de aquellas que se relacionen con actos de corrupción o posibles violaciones graves a derechos humanos, de conformidad con el artículo 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

*De ser necesaria la versión pública, se deberán proporcionar junto con el Acuerdo de Clasificación donde el Comité de Transparencia, confirme la eliminación de los datos clasificados como confidenciales, de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII, 132, fracción II, 143, fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.*

*En el supuesto que la información ordenada en el* ***punto 2*** *no obre en los archivos del* ***Sujeto*** *Obligado por no haber sido servidores públicos del ayuntamiento durante la administración 2022-2024****,*** *bastará con que así lo haga del conocimiento de la parte* ***Recurrente****, de manera fundada y motivada, en términos del artículo 19, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, para tener por colmado el requerimiento de información.*

*En caso de no contar con la información que se ordena en el* ***punto 3,*** *respecto de procedimientos administrativos concluidos con sanción por falta grave, por no haberse generado, bastará con que lo haga del conocimiento de la parte* ***Recurrente*** *de manera clara y precisa.*

**Tercero. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado,** la presente resolución para que conforme a los artículos 186, último párrafo y 189, párrafo segundo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**Cuarto. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, a la parte **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o bien, vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

**Quinto.** **Gírese** oficio a la **Secretaría Técnica del Pleno** de este Instituto a fin de que en ejercicio de sus atribuciones haga del conocimiento del **Órgano Interno de Control Competente** la presente resolución, para que de conformidad con el artículo 190, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, determine lo conducente, en términos de lo señalado en el **Considerando Cuarto** de este fallo.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, EMITIENDO VOTO PARTICULAR; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA, EMITIENDO VOTO PARTICULAR, Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Tesis [A]: 2a. Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LII, Tercera Parte, p. 101, Reg. digital 267287. [↑](#footnote-ref-0)
2. Artículo 49. Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:

   XIII. Dictaminar las declaratorias de inexistencia de la información que les remitan las unidades administrativas y resolver en consecuencia; [↑](#footnote-ref-1)